

¿Hacemos tabla rasa del pasado?

F. JAVIER MERINO

HISTORIADOR Y MIEMBRO DE BAKEAZ

Mientras ETA y su entorno político no hagan una lectura que implique una rectificación explícita por haber asesinado a inocentes y vulnerado derechos humanos básicos, no será posible considerarlos interlocutores demócratas

Un año después de la Conferencia de Ayete –pista de aterrizaje para la declaración de tregua definitiva de ETA–, sus protagonistas han vuelto a comparecer en el escenario político para promover «la participación ciudadana en el proceso de paz en Euskadi». De la bondad de las palabras no hay muchas dudas; sobre el trasfondo de los actos que han organizado sí caben numerosas reflexiones. Es conocida la querencia del nacionalismo radical –soporte y apoyo de ETA antes y ahora– por la perversión del lenguaje, y parece que esta mala práctica se extiende a estos agentes empeñados en contribuir, a su modo, a la paz en Euskadi. Así, la cabeza visible del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Brian Currin, proclama que la responsabilidad de que ETA siga sin entregar las armas reside en el Ejecutivo español (EL CORREO, 15/12/12). No se sabe su opinión sobre quién es el responsable de que ETA no haya decidido aún disolverse; por lo que parece, ninguna de sus recomendaciones y reclamaciones tenía a ETA como destinataria. Hay que reconocer, no obstante, que no están del todo solos el señor Currin y sus compañeros del GIC: el sábado, 15 de diciembre, el Foro de Bayona –con todos los partidos del arco parlamentario francés, con la excepción del Frente Nacional–, acordó un documento de cinco puntos que no tiene a ETA como destinatario, salvo en su papel de interlocutor de los gobiernos español y francés para abordar «el desarme y las consecuencias del conflicto vasco».

Puede haber ingenuidad –cosa rara– y desconocimiento entre los mediadores y los partidos políticos franceses, pero en todo caso no es eso todo lo que hay. Hay también una contribución a la difusión de un lenguaje perverso, que dice para no decir, expresa para encubrir y designa para engañar. ¿De qué otra manera se puede entender la insistencia en invocar a los gobiernos de España y Francia para que adopten «medidas encaminadas a profundizar la distensión»? ¿Por qué habrían los gobiernos y la ciudadanía de favorecer medidas de gracia para presos y exiliados que siguen estando orgullosos de un pasado asesino, entendido y formulado por ellos mismos como «contribución a la lucha por la libertad de nuestro pueblo»? ¿Se trata de implementar medidas de gracia a quienes alardean de haber asesinado por motivos políticos a inocentes? ¿Se trata de ser generosos con quienes han dejado de matar solo porque ya no podían apenas hacerlo, dada su debilidad logística? ¿Hay que contribuir a rematar la labor de los pistoleros agradeciendo que las hayan dejado y aceptando una parte de las reivindicaciones por las que mataron? ¿Debemos olvidar porque lo que hemos escrito y dicho estos años sobre la memoria histórica ya ha prescrito?

La realidad es que, frente a un discurso bastante extendido que insiste en la derrota de ETA y en la inutilidad de los 40 años de asesinatos, hay que

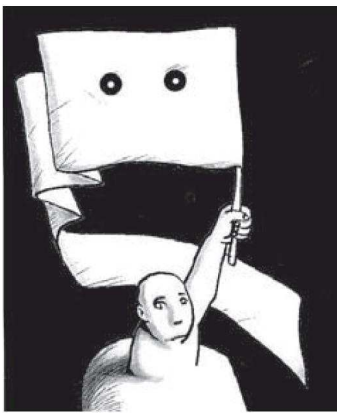
aceptar que difícilmente se puede hablar de derrota política cuando la coalición que asume los objetivos de ETA es la segunda fuerza política en el Parlamento vasco –con cerca del 30% del total de sus parlamentarios–, gobierna numerosos ayuntamientos y una de las diputaciones. Mientras, algunos dirigentes y militantes políticos vascos ya no están en este mundo porque así lo decidió ETA y los partidos a los que pertenecían han sufrido una derrota sin paliativos en las últimas elecciones autonómicas.

Los participantes en la Conferencia de Ayete del pasado año, así como en el Seminario Internacional ‘Diálogo y convivencia’ celebrado en San Sebastián el 14 de diciembre y en el Foro por la paz de Bayona del día siguiente, y todos aquellos que insisten en la necesidad de que los gobiernos «se muevan» para avanzar hacia la pacificación, deberían explicar por qué en relación con ETA la defensa de la justicia y los derechos humanos no pasa por el esclarecimiento de la verdad, la lucha contra la impunidad y el reconocimiento de las víctimas. Quizá deberían, asimismo, aclarar por qué no

hacen ninguna alusión a los cientos de asesinatos de ETA impunes, sin que se exija a los activistas que plausiblemente pueden ayudar a su esclarecimiento su colaboración como síntoma elemental de buena voluntad y de ruptura con el pasado.

Quizá sea precisamente ésta la clave del futuro: ruptura con el pasado. Mientras ETA y su entorno político no hagan una lectura que implique una rectificación explícita por haber asesinado a inocentes y vulnerado derechos humanos básicos no será posible considerarlos interlocutores demócratas. Aceptar las

formulaciones tramposas que se deciden en el estado mayor de nuestra particular ‘Cosa Nostra’ y hacerlas pasar por autocríticas sinceras no es avanzar en la pacificación; es contribuir a la confusión que mezcla víctimas, victimarios, oprimidos, opresores, y que bajo epígrafes como sufrimiento o conflicto solo pretenden transformar el pasado para edificar un futuro en el que se sientan cómodos y puedan participar en pie de igualdad con los demás, como si todos hubiésemos sido responsables en alguna medida de la violencia pasada. Frente a ello, la única terapia debería ser el esclarecimiento de la verdad, la defensa de los valores democráticos y el apoyo a los más débiles, es decir, a las víctimas del terrorismo. Este debería ser el mínimo prepartidista desde el que partir para encarar el ‘nuevo tiempo’. Porque la aceptación de la participación en la vida política legal de las organizaciones del nacionalismo radical no implica necesariamente su consideración como fuerzas democráticas. Al contrario, su papel en la triste historia de la violencia terrorista en Euskadi y su valoración actual de la misma hacen pertinente una caracterización política adecuada que los sitúe en el lugar que les corresponde.



:: JOSE IBARROLA